

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

PROCESO	ORDINARIO
DEMANDANTE	Rosa Elena Orozco de Campillo
DEMANDADO	Colpensiones
PROCEDENCIA	Juzgado Décimo Laboral del Cto. de Medellín
RADICADO	05001 3105 010 2019 00244 01
INSTANCIA	SEGUNDA
PROVIDENCIA	SENTENCIA Nro. 42 de 2023
TEMAS Y SUBTEMAS	Inducción a error - pago de retroactivo
DECISIÓN	Revoca y confirma

En la fecha, **quince (15) de marzo de dos mil veintitrés (2023)**, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral integrada por las magistradas María Eugenia Gómez Velásquez, Claudia Angélica Martínez Castillo, y como ponente Luz Amparo Gómez Aristizábal, procede a emitir pronunciamiento frente al recurso de apelación interpuesto por la apoderada de **Colpensiones**, así como el grado especial de consulta en favor de esta entidad, ordenado en sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito dentro del proceso ordinario promovido por **Rosa Elena Orozco de Campillo**. Radicado único nacional 05001 3105 **010 2019 00244** 01.

La Magistrada ponente, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes el proyecto, estudiado, discutido y aprobado, mediante acta **Nº 005**, que se adopta como sentencia y se plasma a continuación:

Antecedentes

La demandante convocó a juicio a Colpensiones pretendiendo se condene al pago del retroactivo causado entre el 6 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 23015, fecha en que fue incluida en nómina, junto con los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, o en subsidio la indexación, y las costas del proceso.

En sustento narra que nació el 13 de octubre de 1937, acreditando los requisitos para pensionarse bajo lo regulado en la Ley 71 de 1988, esto es 20 años de servicios y arribó a la edad el 13 de octubre de 1992; que mediante Resolución 6066 del 06 de abril de 2005, confirmada en la 10515 del 14 de junio del mismo año, se le negó el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez; que el 17 de mayo de 2012, petitionó el reconocimiento de la pensión de vejez al contar con 1.020 semanas, negándosele en acto administrativo 021993 del 31 de julio de 2012, decisión frente a la cual se interpuso recurso de reposición y apelación, siendo desatados de manera negativa, el primero en Resolución GNR 211282 del 21 de agosto de 2013 y, el segundo con la Resolución VPB5585 del 21 de abril de 2014; que el 29 de septiembre de 2014, interpuso acción de tutela a fin de que la entidad le tuviera en cuenta las cotizaciones que realizó como independiente de 2004 a 2006, siendo negada, no obstante, la Corte Constitucional en sentencia T-377-2015, amparó sus derechos, ordenándole a Colpensiones la liquidación de la deuda y tener un reporte actualizado y acertado de las semanas que efectivamente cotizó, adicional a reconocer los periodos laborados con el Municipio de Medellín entre marzo de 1998 y septiembre de 1999, cumpliendo Colpensiones dicha orden el 05 de enero de 2016, al liquidar el cálculo actuarial por el periodo del 01 de enero de 2004 al 30 de junio de 2006, procediéndose con el pago.

Afirma que, ante las negativas brindadas por Colpensiones en sus Resoluciones, se vio obligada a reanudar sus cotizaciones en el sector privado a fin de obtener la pensión, la cual le fue otorgada en Resolución GNR291936 del 30 de septiembre de 2016, al acreditar los supuestos de la Ley 71 de 1988, con un IBL de \$2.518.979,00 al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, decisión frente a la que interpuso los recursos de Ley, a fin de que se le cancelara el retroactivo entre el 06 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2015, junto con los intereses moratorios, siendo decididos de manera adversa en actos administrativos DIR1921 del 21 de marzo de 2017 y GNR291936 del 30 de septiembre de 2016.

En auto del **24 de abril de 2019**, se admitió y ordenó dar trámite a la acción. Debidamente enterada la demandada allegó escrito de contestación, aceptando la fecha de nacimiento de la actora, la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, el contenido de los actos administrativos negando la misma, la interposición de la acción de tutela, la decisión emitida por la Corte Constitucional, la liquidación del cálculo actuarial, el pago del mismo por la parte actora. Así mismo, admite lo dispuesto en la resolución que le reconoció la pensión y la interposición de los recursos de ley frente a dicho acto. **Resistió las pretensiones**, argumentando que la demandante realizó el pago del cálculo actuarial ordenado mediante fallo de tutela, el 14 de abril de 2016, por lo que solo hasta ese momento esos periodos pudieron ser tenidos en cuenta para el estudio de la prestación solicitada, pues, en fecha anterior no habían sido imputados en su historia laboral, al confesarse la omisión en el pago de los aportes en el lapso del 1º de enero de 2004 al 30 de junio de 2006. Por último, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de pagar retroactivo pensional e intereses moratorios, improcedencia de la indexación de las

condenas, cobro de lo no debido, prescripción, imposibilidad de condena en costas, compensación indexada y pago, buena fe y, la innominada.

La primera instancia **terminó con sentencia** proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito en la que condenó a Colpensiones a reconocerle y pagarle a la actora, la suma de \$129.783.845,00, por concepto de retroactivo pensional comprendido entre el 6 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2015, valor sobre el cual se deben otorgar los intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 18 de septiembre de 2012 y hasta cuando se efectúe la cancelación total de la obligación. Autorizó a descontar del retroactivo los aportes en salud, declaró no probada la excepción de prescripción e impuso costas a cargo de la vencida.

Argumentó el fallador que de conformidad con los medios de convicción obrantes en el expediente, se advertía que a la actora le fue reconocida la pensión de vejez en aplicación del régimen de transición de conformidad con la Ley 71 de 1988, alcanzando los 55 años, el 13 de octubre de 1992 y las 1.029 semanas de cotización el 6 de diciembre de 2009, tal y como se consideró en la Resolución GNR291936 de 2016, expedida luego de que la Corte Constitucional le ordenara a Colpensiones cobrar y tener en cuenta los aportes dejados de cancelar entre enero de 2004 y junio de 2006, providencia que es el resultado de una serie de actuaciones administrativas y judiciales tendientes a obtener el pago de la pensión. Explicó que de los eventos advertidos en el proceso y del actuar diligente de la demandante, se podía concluir que le asiste derecho al reconocimiento de la prestación desde el 6 de diciembre de 2009, al haberse realizado aportes posteriores no con miras a incrementar el IBL, sino a consolidar el derecho ante las reiteradas negativas de la accionada.

Declaró no probada la excepción de prescripción al haberse solicitado la pensión el 17 de mayo de 2012, siendo resuelta de manera definitiva con la Resolución del 21 de marzo de 2017, presentándosele la demanda el 23 de abril de 2019 y, dispuso el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, ante la tardanza de la administradora en resolver el asunto, a partir del 18 de septiembre de 2012, esto es, 4 meses después de elevada la petición.

Inconforme con la decisión la apoderada de Colpensiones interpuso recurso de apelación, instando para que se revoque la sentencia al no haberse considerado que el pago del cálculo actuarial ordenado en sentencia de tutela se dio el 14 de abril de 2016, por lo que, solo hasta ese momento dichos aportes pudieron ser tenidos en cuenta para el estudio de la pensión, sin cumplirse con antelación la exigencias de la norma bajo la que se estudió el derecho, sumado a que para poder cancelarla se debió acreditar el requisito de retiro del sistema. Puntualiza que no es posible otorgar un retroactivo, así como los intereses de mora, en tanto, estos últimos solo se pagan cuando se incumple en el desembolso de mesadas ya reconocidas.

De la etapa de **alegaciones ante esta instancia** hizo uso Colpensiones, afirmando que se pasó por alto que la parte actora canceló el cálculo actuarial el 14 de abril de 2016, por tal, solo hasta dicho momento esos periodos pudieron ser tenidos en cuenta para el estudio del reconocimiento y pago de la pensión, sin que en fecha anterior hubiese acreditado las exigencias legales, adicional a que es obligación de la entidad tener en cuenta hasta la última cotización, luego, si el afiliado no reporta la novedad de retiro no se puede exigir el reconocimiento desde antes. Ruega se imparta absolución, al no contar la demandante con requisitos para el otorgamiento de la prestación.

Demandante, afirma de manera suscita, que teniendo en cuenta el material probatorio, así como el precedente de la Corte Suprema de Justicia y la Constitucional, del cual extrae apartes, se debe tener en cuenta para el cálculo de la pensión las semanas laboradas por la demandante como juez, entre el 04 de septiembre de 1970 y el 24 de enero de 1972, las cuales sumadas a las aportadas arrojan un total de 1.407,86, pudiéndosele así reconocer el derecho en aplicación del Decreto 758 de 1990, con una tasa de reemplazo del 90%, atendiendo las facultades ultra y extra petita, dada la irrenunciabilidad de los derechos mínimos establecidos en las normas laborales.

Por último, pide se condene al pago de los intereses moratorios.

En orden a decidir, basten las siguientes,

Consideraciones:

Son hechos debidamente acreditados en los autos: que Rosa Elena Orozco, nació el 13 de octubre de 1937, negándosele el reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez mediante Resolución 6066 del 6 de abril de 2005, confirmada en la 10515 del 14 de junio del mismo año; **que 17 de mayo de 2012**, radicó solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de vejez, decidida adversamente en Resolución 021993 del 01 de julio de 2012, argumentándose que al realizar la sumatoria de tiempo público y privado solo contaba con 949.71 semanas de cotización, debiendo seguir aportando hasta reunir el tiempo exigido en la Ley 797 de 2003, decisión frente a la cual se interpuso recurso de reposición, desatado negativamente en acto administrativo GNR211282 del 21 de agosto de 2013, presentándose apelación, refutándose que ***las semanas cotizadas durante el tiempo que laboré como Juez en el municipio de Girardota no han sido consideradas,***

los documentos que certifican el tiempo laborado en este cargo fueron entregados y reposan en la documentación que ustedes tienen, siendo resuelto el 12 de abril de 2014 en Resolución VPB5585, confirmándose en todas las partes el acto atacado; que la demandante presentó acción de tutela el 29 de septiembre de 2014, pretendiendo se le ordenara a Colpensiones que le liquidara y le permitiría pagar las semanas que debió haber cotizado en su condición de trabajadora independiente, entre enero de 2004 y junio de 2006, **la cual fue resuelta de manera definitiva por la Corte Constitucional en sentencia T377-2015**, en la que se concluyó:

En este orden de ideas, se estima plausible admitir que mientras: (i) haya existido la obligación de realizar los aportes, esto es, desde el 29 de enero de 2003, momento en el que la Ley 797 de 2003 entró en vigencia y equiparó la obligación de los trabajadores dependientes e independientes con respecto al deber de pertenecer al sistema de seguridad social en pensiones, y (ii) el plazo oportuno para realizar el pago en encuentre caducado, se configuró el incumplimiento de la obligación legal en comentarios y, por tanto, al materializarse el supuesto de hecho que prevé la norma, esto es, el vencimiento del plazo para efectuar el pago, se constituyó la mora y esta deberá ser cancelada por el afiliado con sus respectivos intereses y calculo actuarial.

Adicional a que llamó la atención frente al:

...flagrante desconocimiento de la obligación que le impone el artículo 15 de la Ley 100 a los trabajadores independientes de vincularse al sistema, decidió rechazar su solicitud de pago e impedirle sufragar su deuda, pues consideró que el hecho de que la reglamentación vigente al momento en el que incurrió en mora no hubiera previsto el pago de intereses para los trabajadores independientes implica que estos no pueden incurrir en ella y, por tanto, los aportes que se realicen con posterioridad al periodo al que presuntamente corresponden, no pueden ser aplicadas retroactivamente.

Estableciendo que:

Colpensiones ha desconocido su derecho fundamental a la seguridad social, pues se ha negado a recibirle los aportes que dejó de pagar en su momento y que, en la actualidad, tras reconocer su omisión, pretende saldar; impidiéndole así tener un reporte actualizado de las semanas en que ha participado del sistema.

Ordenando:

(i) dé aplicación retrospectiva de lo dispuesto en el artículo 7 del Decreto 3085 de 2007 y, en consecuencia, liquide la deuda de la accionante en relación con los pagos de los aportes que omitió realizar en el periodo de tiempo comprendido entre enero de 2004 y junio de 2006, de forma que le sea posible saldar su deuda y tener un reporte actualizado y acertado de las semanas que efectivamente ha cotizado al sistema; y (ii) contabilice dentro de la historia laboral de la accionante el periodo de cotizaciones comprendido entre marzo de 1998 y septiembre de 1999, así como que adelante las actuaciones correspondientes para obtener el efectivo cobro de dichos dineros, de forma que no traslade al trabajador las consecuencias de su inacción.

De dicha providencia y de la prueba obrante en el plenario, también se extrae que **la actora en mayo de 2014, le solicitó a Colpensiones le indicara el monto adeudado por las cotizaciones no efectuadas como trabajadora independiente entre enero de 2004 y junio de 2006** y, tras no recibir respuesta, el 16 de abril de 2014, decidió pagar lo que en su concepto debía, esto es, \$8.138.000,00, y ante la persistencia del no pronunciamiento por parte de la entidad, el 7 de julio de 2014, interpuso acción de tutela a fin de que cesara la vulneración al derecho de petición y se le diera respuesta a sus requerimientos, por lo que al haberse amparado sus derecho en sentencia del 18 de julio de 2014, la entidad le respondió indicándole que a la luz del ordenamiento jurídico vigente, no era posible que los trabajadores independientes realizaran pagos extemporáneos; que el 20 de abril de 2016, Colpensiones le informa a la actora que el 05 de enero de dicho año, liquidó el cálculo actuarial para el periodo 01/01/2004 a 30/06/2006, descontando el valor pagado por \$8.138.000, arrojando un valor a cancelar de \$33.148.424,00, no obstante, ante la inconformidad por ella presentada se volvió a efectuar estudio de la liquidación obteniendo un valor a cancelar inferior al ya sufragado, por tal, solicitaron al área competente, la iniciación del trámite tendiente a la incorporación del tiempo y salarios en la historia. El 6 de julio de 2016

peticionó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez, concediéndose la misma en Resolución GNR291936 del 30 de septiembre, a partir del 01 de enero de ese mismo año, en cuantía de \$2.017.135,00. Para el análisis de la prestación se tuvo en cuenta lo dispuesto en la Ley 71 de 1988, el estatus de pensionada a partir del 6 de diciembre de 2009, un IBL de \$2.518.979,00 al que se le aplicó una tasa de reemplazo del 75%, estando la prestación a cargo del Departamento de Antioquia, Municipio de Medellín, Ministerio de Defensa y Colpensiones.

Es de anotar, frente a lo expuesto por la defensa de la demandante en la etapa de alegaciones que, la Sala centrará su estudio en los puntos que fueron objeto de recurso de alzada al tenor de la directriz que para estos efectos traza el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984, en concordancia con el artículo 35 de la Ley 712 de 2001, así como al grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, atendiendo las directrices jurisprudenciales, no a aquellos contenidos en los alegatos de conclusión, pues, no le es dable a las parte pretender que los argumentos planteados en tal etapa, subsanen de alguna manera cualquier posible deficiencia existente al momento de instaurar la demanda o de interponer y sustentar el recurso vertical, o cuando no se presenta el mismo, como acontece en el presente caso, en tanto, el principio de consonancia previsto en el artículo 66A del CPTSS limita el pronunciamiento de segundo grado a los temas planteados en la apelación (SL4397-2015 y SL9518-2015), adicional a que los alegatos de conclusión se convierten en la oportunidad para que los apoderados planteen la teoría del caso desde la óptica de quien los presenta, de acuerdo al debate probatorio, trámite procesal y a los puntos objeto de inconformidad, sin que se puedan ampliar o adicionar aspectos no manifestados en forma oportuna. Sobre el particular la Sección Primera del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, en

providencia del 09 de febrero de 2017, proceso con radicación, 66001-23-33-000-2016-00080-01, explicó:

*... la Sala encuentra necesario precisar que los argumentos esgrimidos por la parte demandada en los alegatos de conclusión constituyen verdaderos reparos contra la sentencia impugnada que no pueden ser tenidos en cuenta por las siguientes razones: (i) Los alegatos de conclusión constituyen la oportunidad procesal otorgada a las partes para que, si a bien lo tienen, manifiesten sus impresiones respecto de lo ocurrido en el trasegar de la instancia correspondiente. En ese sentido, es la oportunidad para expresarle al juez cuál debe ser, en su sentir, la conclusión a la que se debe llegar luego de analizar los fundamentos de hecho, de derecho, y el acervo probatorio, **sin que sea posible a esas alturas del proceso traer nuevos cargos o solicitar nuevas pruebas.** (ii) **Si se abre la posibilidad de que las partes usen los alegatos de conclusión para adicionar los cargos de la demanda o los fundamentos de la apelación, se vería comprometido el debido proceso como quiera que la otra parte o incluso los terceros vinculados al proceso no tendrían oportunidad de oponerse a esos nuevos argumentos.** No puede perderse de vista que el proceso está diseñado de tal manera que cada etapa obedece a una estructura lógica tendiente a garantizar los derechos de las partes y a permitirle al juez que adopte una decisión de fondo. Así, los nuevos argumentos introducidos por el demandado en los alegatos de conclusión relativos a que la sentencia impugnada no tuvo en cuenta su conducta escapan al estudio de esta instancia como quiera que no fueran planteados en el recurso de apelación.*

A ello se suma lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 42 del C. G. del P., regulatorio de los **deberes del juez**, que autoriza *interpretar la demanda de manera que permita decidir el fondo del asunto. Esta interpretación debe respetar el derecho de contradicción y el principio de congruencia.* Sin que para el caso, ni remotamente se infiera de las pretensiones, la **reliquidación bajo los parámetros del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año**, planteada en la etapa de alegaciones en esta instancia.

Así las cosas, teniendo en cuenta los planteamientos de las recurrentes y el grado jurisdiccional de consulta en favor de Colpensiones, **el problema jurídico** en esta instancia se circunscribe a establecer, si es posible el reconocimiento y pago de mesadas a partir del 6 de diciembre de 2009, fecha en la que se le reconoció a la actora el estatus de

pensionada en la Resolución GNR291936 del 30 de septiembre de 2016, así como si es dable la imposición de intereses moratorios.

En relación con **el pago de mesadas retroactivas desde el 06 de diciembre de 2009, por inducción a error**, debe indicarse que esta tesis se basa en que resulte patente y caprichoso el actuar de la entidad al negar la pensión al afiliado que tiene cumplidos los requisitos de edad y densidad de semanas, pues dentro de sus obligaciones está la de custodiar y actualizar la historia laboral, indicándose por la jurisprudencia especializada sobre este particular que: *no es posible hacer responsable al asegurado de los errores de la administradora de pensiones, quien como en esta oportunidad acontece **debió reconocer el derecho en su oportunidad, por estar ya satisfechos la totalidad de los requisitos exigidos por los reglamentos del ISS.*** Sentencias 39391 de 2011, reiterada en la 42289 de 2012, en la SL 47236 del 06 de abril de 2016 y en la SL15559-2017.

En la sentencia del 5 de abril de 2011, proceso radicado con el número 43564, indicó la Corporación:

...Y en esa conclusión no encuentra la Sala ningún desacierto fáctico, porque si esa entidad de seguridad social, sin ninguna razón atendible para ello, no le reconoció al actor el derecho a la pensión de vejez cuando debió hacerlo y esa injustificada negativa trajo como consecuencia que aquel continuara cotizando al sistema de seguridad social en pensiones para, luego, poder pedir nuevamente que se le reconociera la prestación, no puede pretenderse que se pase por alto esa situación y que se tome como fecha en la que el demandado incurrió en mora la del vencimiento para dar respuesta a la segunda petición, originada en una equivocada conducta de ese instituto convocado al pleito.

Y en la SL2061-2021, argumentó el mismo órgano de cierre:

"Significa lo anterior que con su comportamiento el ISS, ahora Colpensiones, indujo en error al reclamante por la mora en resolver la situación, pues transcurrieron 18 meses entre la solicitud y la respuesta, amén de las tres (3) negativas desde el año 2007 aduciendo falta de requisitos, entre ellos tiempo cotizado, con lo cual acentuó la inducción al yerro, razón por la cual el actor

se vio compelido a continuar la vinculación laboral con la entidad pública ESE Hospital de Sabanalarga, así como con otra entidad privada y cotizando en calidad de independiente.”

Criterio vigente en la jurisprudencia especializada, conocido y aplicado por esta Sala de Decisión, el cual tiene cabida en el caso a estudio, en tanto, si bien Colpensiones negó la prestación inicialmente con fundamento, al no haber computado las semanas en que la actora no había realizado cotizaciones como trabajadora independiente, entre enero de 2004 y junio de 2006, no se pudo obviar y mucho menos pasar por alto que se ignoró por la demandada lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia T377-2015, la cual hace tránsito a cosa juzgada y, en la que se indicó que: ***Colpensiones ha desconocido su derecho fundamental a la seguridad social, pues se ha negado a recibirle los aportes que dejó de pagar en su momento y que, en la actualidad, tras reconocer su omisión, pretende saldar; impidiéndole así tener un reporte actualizado de las semanas en que ha participado del sistema,*** disponiendo en consecuencia, la liquidación de dicho periodo, el cual, contrario a lo expuesto por la recurrente, fue cancelado por la actora, no en el 2016, sino el 16 de abril de 2014 y en mayor valor del calculado, adicional a que es sabido que las cotizaciones que se efectúen, así sea de manera posterior al periodo en que se deben tener en cuenta, se contabilizan para el lapso al que corresponden.

Por otro lado y, a fin de respaldar la decisión, es de resaltar que la propia entidad en la Resolución GNR291936 del 30 de septiembre de 2016, le reconoce el estatus de pensionada a la señora Rosa a partir del 6 de diciembre de 2009; sin embargo, le otorga la prestación en aplicación de la Ley 71 de 1988, a partir del 1º de enero de 2016, día posterior a la última cotización a la que se vio obligada ante la negativa de la entidad en reconocerle el tiempo como independiente, que como ya se dijo, se dispuso su computo por parte de la Corte Constitucional, sumado a que

los aportes efectuados con posterioridad a diciembre de 2009, se evidencia no se hicieron con la finalidad de aumentar el IBL, en tanto, el incremento de 2009 a 2010 fue de \$54.000, de 2011 a mayo de 2014 de \$62.000 y de junio de 2014 a diciembre de 2015 de \$1.000, luego, resulta procedente, tal y como lo dispuso el juez de instancia otorgarle la prestación desde la fecha en que se dio el estatus de pensionada, ante la no aparición del fenómeno extintivo de la prescripción, al solicitarse la pensión en mayo de 2012 y, finalizar dicho trámite con la interposición de los recursos de Ley frente a la resolución GNR291936 del 30 de septiembre de 2016, en la cual se le otorgó la prestación, esto es, el 21 de marzo de 2017, con el acto administrativo DIR1921, y la demanda presentarse en el 2019.

Así, efectuadas las operaciones matemáticas, en el grado jurisdiccional de consulta, se obtuvo suma idéntica a la liquidada por el juez de instancia, tal y como se advierte en cuadro adjunto, para ello se tuvo en cuenta 13 mesadas al año y se deflactó lo concedido por parte de Colpensiones en el 2016 hasta el 2009, luego, se confirma la sentencia en este apartado y en cuanto dispuso la deducción de los aportes a salud del monto del retroactivo (artículos 143 de la Ley 100 de 1993 y 42 inciso tercero del Decreto 692 de 1994, sentencias SL2557-2020 y SL599-2022, entre otras).

Frente a la inconformidad relacionada con la condena a los **intereses moratorios**, es de indicar que en la sentencia SL2117-2022, donde se reitera lo expuesto en la SL3130-2020, la Corte preciso aspectos sobre este concepto, así: *i)* su naturaleza es resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición; *ii)* buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y *iii)* existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando fluyan razones atendibles

al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de reglas jurisprudenciales. Así, el retardo o mora se erige en el único supuesto fáctico que desencadena los intereses moratorios, por lo que se causan desde el momento mismo en que ha ocurrido la tardanza en el cubrimiento de las pensiones, **no obstante**, para el caso dadas las pautas antes anotadas, las razones que tuvo la entidad para no pagar oportunamente las mesadas resultan atendibles, debido a que la actora canceló el tiempo en que no realizó aportes como trabajadora independiente entre enero de 2004 y junio de 2006, y que sirve de base para concederle el retroactivo pensional, **en abril del 2014**, convalidándose dicho pago, ante las negativas de la entidad, con la sentencia **T-377-2015**, por lo que resulta dable revocar la sentencia en cuanto concedió dicho concepto, al haberse resuelto de manera negativa, inicialmente, con un fundamento atendible, esto es, el no tener la densidad de semanas exigidas, **en su lugar** se dispone la indexación del valor de cada una de las mesadas atendiendo su causación periódica, ello, ante la pérdida de poder adquisitivo de la moneda y el derecho de la actora a percibir el monto real de lo debido, concepto que fue solicitado en la demanda, aclarando que procede aún de oficio, al no comportar esta una condena adicional, sino una garantía constitucional en los términos del artículo 53 Superior, tal y como ha sido reiterado por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL359-2021, SL997-2021, SL1034-2021, SL1759-2021, SL4248-2022, SL4184-2022 y SL060-2023 entre otras.

Sin costas en esta instancia, al salir parcialmente avante el recurso de apelación.

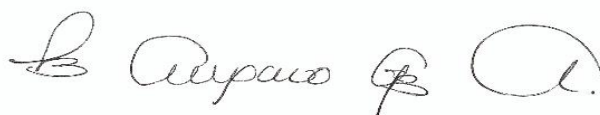
En mérito de lo expuesto, la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **revoca el**

numeral segundo de la sentencia proferida por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de esta ciudad, dentro del proceso ordinario promovido por **Rosa Elena Orozco de Campillo** en contra de **Colpensiones**, solo en cuanto dispuso el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, **en su lugar se condena a Colpensiones a indexar las medadas** a cancelar por concepto de retroactivo pensional, teniendo en cuenta para ello su causación periódica. En lo demás se confirma la decisión revisada.

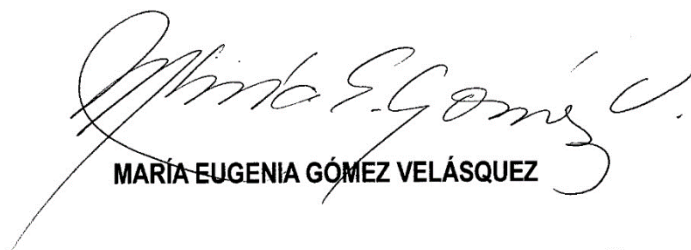
Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica a las partes por **EDICTO, que se fijara por secretaria por el término de un día**, en acatamiento a lo dispuesto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en auto AL2550-2021.

Las magistradas (firmas escaneadas)



LUZ AMPARO GÓMEZ ARITIZABAL



MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ



CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO

DEFLACTAR PENSIÓN				
Año	IPC	Valor Pensión	# Mesadas	Total Retroactivo
2008	7,67%	\$ 1.390.780		\$ -
2009	2,00%	\$ 1.497.453	0,83	\$ 1.242.886
2010	3,17%	\$ 1.527.402	13	\$ 19.856.223
2011	3,73%	\$ 1.575.820	13	\$ 20.485.666
2012	2,44%	\$ 1.634.599	13	\$ 21.249.781
2013	1,94%	\$ 1.674.483	13	\$ 21.768.276
2014	3,66%	\$ 1.706.968	13	\$ 22.190.580
2015	6,77%	\$ 1.769.443	13	\$ 23.002.755
2016	5,75%	\$ 1.889.234		\$ -
			TOTAL	\$ 129.796.167